

CARLOS GÓMEZ GIL

Un análisis multifocal del terremoto de Haití.

Algunos análisis y lecciones estructurales

Carlos Gómez Gil es sociólogo, profesor de la Universidad de Alicante y director del Observatorio Permanente de la Inmigración de esta Universidad.

El terremoto que sacudió Haití el 12 de enero de este año ocasionó pérdidas humanas y materiales sin precedentes en el hemisferio, poniendo a prueba un sistema de ayuda que dio muestras de algunas disfunciones en momentos clave. Tras la conferencia de donantes de Nueva York del 31 de marzo y ante la retórica habitual exenta de propuestas prácticas y compromisos concretos, parece oportuno realizar una cierta reflexión sobre algunas de las claves estructurales de la catástrofe desde una visión multifocal, para orientar mejor estrategias futuras. Para ello incorporamos como perspectivas teóricas novedosas el análisis de las catástrofes como mecanismo de clase, así como las respuestas dadas desde la perspectiva de un capitalismo piadoso.

El terremoto sucedido en Haití el 12 de enero de 2010 ha venido ocupando un gran número de informaciones en los medios de comunicación y ha sido analizado desde diferentes perspectivas: humanitarias, mediáticas, políticas, económicas, sanitarias, multilaterales, solidarias. Así, los medios de comunicación han seguido el suceso desde el impacto de las informaciones e imágenes que proporcionaba; los Gobiernos han visto la posibilidad de anunciar su profunda generosidad por medio de anuncios de futuras ayudas millonarias y visitas de sus gobernantes; las instituciones multilaterales han tratado de incluir a Haití en sus agendas a pesar de que llevaba lustros abandonada a su suerte; las ONG han aprovechado como pocos la ocasión para desplegar su ritual de códigos, mensajes, anuncios y peticiones de dinero; al tiempo que la sociedad resultó conmovida por un drama tan gigantesco mientras se reclamaba su ayuda, especialmente la económica. Pero han sido muy escasos los análisis efectuados para tratar de comprender las condiciones estructurales que han alimentado un cataclismo humano de esa magnitud, algo que no pasa exclusivamente por el desplazamiento de las placas tectónicas de la región, sino que se vincula con las características morfológicas generadas durante años en los países empobrecidos

de la mano de decisiones políticas, que adquieren un particular impacto en coincidencia con una catástrofe.

Catástrofe de clase

Tragedias como la de Haití no son nuevas. Nos hemos acostumbrado a éxodos, hambrunas, terremotos, inundaciones, tsunamis y todo tipo de catástrofes, si bien en los últimos años, su repetición y especialmente sus dramáticas consecuencias sobre millones de personas y países en permanente estado de calamidad, permiten que veamos con claridad cristalina cómo su impacto es mayor cuanto más pobre y miserable es el país que lo sufre. Es un matemático axioma que funciona con una precisión aritmética a la hora de llevarse por delante vidas y países, pero cuya aplicación no tiene nada de caprichoso, sino que es el fruto de procesos humanos deliberados y conocidos que en combinación con determinados fenómenos naturales adquieren dimensiones gigantescas. Este conjunto de fenómenos provienen de decisiones humanas que generan lo que podríamos denominar como catástrofes de clase.

El concepto de clase ha ocupado un amplio espacio en los análisis de algunos de los autores de la sociología más relevantes, entre los que se destacan Marx y Weber. Los elementos económicos determinantes del concepto de clase y su dimensión material, como es desarrollado por Marx, se complementan con la perspectiva estamental y la propia posición de los sujetos, así como el destino personal de éstos en sus posibilidades de éxito en el mercado, en línea con lo desarrollado por Weber. Sin embargo, posiblemente necesitemos también de una perspectiva wallersteniana que incluya el análisis de los sistemas-mundo para poder comprender mejor los procesos económicos y sociales dentro de los límites del sistema, para entender el significado de una catástrofe de clase y sus consecuencias como vemos en Haití de manera inequívoca.

Efectivamente, sabemos sobradamente que cada catástrofe que periódicamente nos sacude es un excelente indicador de la situación social y política de cada país, de su grado de desarrollo, pero especialmente, de las condiciones de vida de los más desposeídos, es decir, de la condición estamental y de clase del país y de sus habitantes. Ya sean ciclones o terremotos, huracanes o inundaciones, hambrunas o sequías, los pobres tienen un raro privilegio, probablemente uno de los pocos de sus desdichadas existencias: ser víctimas predilectas de estas catástrofes, protagonistas privilegiados de cada siniestro a los que añaden damnificados contabilizados en cientos de miles de personas.

El volumen de víctimas que estas catástrofes han originado en los últimos años pudiera llevarnos a pensar que nuestro planeta es cada vez más indómito y caprichoso, a pesar de los avances técnicos, si bien, no hace sino demostrar con toda contundencia las dramáticas diferencias en las que vive la humanidad junto a las asimetrías sociales tan profundas que separan unos Estados de otros. Así, se nos muestra tecnológicamente domesticado en los países occidentales donde las catástrofes apenas originan víctimas, mientras que en los países empobrecidos esos mismos desastres originan decenas y cientos de miles de damnificados, como sacrificio añadido a las penosas condiciones de vida que acompañan la existencia de tantos cientos de millones de personas.

Y, aunque puedan ser naturales los orígenes de muchas catástrofes, no lo son en absoluto sus efectos, sino que tienen una responsabilidad claramente humana: la de mantener en países y ciudades a buena parte de la población viviendo en condiciones infames, sobre laderas de montañas frágiles, bajo casas levantadas con desechos que se transforman en tumbas cuando la naturaleza decide reivindicar su propio ser, entre basuras, o en medio de zonas pantanosas e inundables. Y esta responsabilidad humana es la que explica tanta pasividad ante catástrofes cíclicas como sucede con los terremotos, cuando hay tanta negligencia a la hora de prevenir sus efectos y paliar sus consecuencias sobre zonas y países en permanente riesgo sísmico. La misma responsabilidad de tantos gobernantes que ven impasibles cómo cada cataclismo se lleva por delante a sus ciudadanos, destruyendo la capacidad misma de sus pueblos así como de poblaciones enteras prácticamente cada año, pero manteniendo las mismas decisiones políticas que vuelven a reiniciar el ciclo de pobreza, precariedad, sumisión, fragilidad económica y exclusión social que devoran a tantas víctimas en catástrofes, como si alimentáramos a una peligrosa bestia.

Las bases económicas previas a la catástrofe

Podríamos pensar que el comportamiento sísmico de la placa tectónica del Caribe y la falla de desgarramiento que están en el origen de los movimientos sísmicos de la región, nada tienen que ver con las decisiones que han venido adoptando instituciones económicas multilaterales, Gobiernos y multinacionales sobre Haití, si bien estamos ante energías que se suman en su devastador poder de destrucción, multiplicando así su fuerza catastrófica. Y no hace falta que nos remontemos al desdichado pasado histórico de Haití, sus 200 amargos años desde su independencia y el derrocamiento por los esclavos haitianos de sus amos franceses, pasando a ser el primer país en tener que hacer frente al pago de una gigantesca indemnización a los esclavistas franceses como compensación por obtener su independencia en 1804, cifrada en 50

millones de francos de oro, cantidad similar al presupuesto de Francia en esas fechas. Haití ha sido uno de los pocos países del mundo que ha tenido 42 presidentes de los cuales, 29 han sido asesinados y únicamente dos han sido elegidos democráticamente. La pobreza más brutal en la que se ha encontrado el país ha sido herencia directa, quizá, de uno de los sistemas más brutales de explotación colonial en la historia mundial, agravado por décadas de opresión poscolonial.

En los años noventa, durante el Gobierno de Jean-Bertrand Aristide, Estados Unidos y las instituciones de Bretton Woods desplegaron un conjunto de políticas que fueron limitando la capacidad de decisión de un país depauperado y empobrecido tras años de dictadura, violencia y asesinatos. Así, se anunció un plan de racionalización económica consistente en la privatización de empresas del Estado deficitarias, la reducción de la plantilla de funcionarios, la eliminación de subsidios a agricultores y la rebaja de aranceles a las importaciones junto a la liberalización del comercio, al tiempo que se solicitaron ayudas económicas al FMI y al BM esenciales para que el país pudiera hacer frente a las cuantiosas deudas contraídas en los años anteriores. Haití contaba por entonces con una producción de arroz que era esencial en la dieta de sus habitantes, manteniendo con ello a un buen número de agricultores en todo el país. Sin embargo, dentro del paquete de medidas económicas exigidas desde Washington estaba la reducción de los aranceles a las importaciones de arroz, que pasaron así del 50% al 3%. En poco tiempo, el precio del arroz se desplomó motivado por las importaciones masivas de arroz estadounidense procedente de Riceland Foods, en Arkansas, que al costar 3,8\$ por kilo resultaba mucho más barato que el arroz haitiano a 5,12\$. Como consecuencia de ello, miles de agricultores arruinados se vieron obligados a abandonar sus cultivos y se dirigieron a la atestada y pobre capital, Puerto Príncipe, ocupando sus arrabales en chabolas e infraviviendas insalubres. Muchos de ellos se han convertido años después en víctimas del terremoto de enero de 2010, aunque olvidamos que ya eran víctimas de la desnutrición, la violencia, la insalubridad, las enfermedades y el abandono extremo. El capitalismo sin víctimas es como la religión sin pecado: no funcionan, y en Haití, el capitalismo más salvaje preparó el terreno para que más tarde o temprano, cualquier catástrofe cosechara sus abundantes frutos en términos de victimarios.

El presidente Jean-Baptiste Aristide fue nuevamente derrocado el 29 de febrero del 2004 por no cumplir la imposición del FMI de privatizar bancos, la empresa cementera y la compañía telefónica nacional. El sistema seguido para ello fue muy sencillo: el FMI y el Banco Mundial instauraron un bloqueo de la “ayuda” que estaba en perfecta consonancia con los deseos del gobierno de EEUU presidido por George Bush. Por aquellos años, el economista Jeffrey Sachs, ex asesor de los dos

organismos de Bretton Woods, manifestó al respecto: «Los dirigentes estadounidenses eran perfectamente conscientes de que el embargo de la ayuda provocaría una crisis en la balanza de pagos, el incremento abrupto de la inflación y el derrumbe del nivel de vida, lo que a su vez aumentaría el malestar contra Aristide». Y efectivamente, así fue, ya que un grupo paramilitar invadió Haití permitiendo a continuación que el presidente Aristide fuera sacado del país por tropas norteamericanas.

La doble moral del FMI en Haití

Haití, que en los años setenta era un país prácticamente autosuficiente desde el punto de vista alimentario y llegó a exportar arroz, se convirtió en la década de los noventa en una nación desvalida y dependiente que necesitaba importar el 50% de todos sus alimentos y hasta el 80% de todo el arroz, básico en la dieta de sus habitantes junto a los frijoles, hasta el punto que en estos momentos, Haití comparte con Eritrea, Liberia y Níger la categoría de país pobres sin alimentos ni combustibles. Nada de esto preocupaba antes del terremoto a los responsables del FMI, que tras la visita del equipo de funcionarios presidido por Ugo Fasano al país el 12 de febrero de 2008, señalaba en un comunicado que «la evolución macroeconómica del país era favorable», aprobándose un amplio programa sobre temas como «liberalización de inversiones públicas y eliminación de obstáculos estructurales para el crecimiento del crédito» en el país. Más de lo mismo, para seguir profundizando en las bases estructurales de la tragedia.

Ahora bien, tras la catástrofe, el FMI por boca de su director, Dominique Strauss-Kahn, no tuvo empacho de pedir a la comunidad internacional un «Plan Marshall que permita la reconstrucción integral de Haití», anunciando a bombo y platillo el ofrecimiento de 114 millones de dólares para financiar la emergencia. Sin embargo, lo que no explicaba Strauss-Kahn son las exigencias en forma de planes de ajuste macroeconómico que tenía esa ayuda y su condición de crédito a devolver, que se sumaba así a los 891 millones de dólares que Haití debía en el momento de producirse el terremoto, de los cuales, 165 millones corresponden al FMI, y que este organismo se ha negado sistemáticamente a cancelar. De hecho, los 114 millones de dólares ofrecidos por el FMI se otorgaban en forma de préstamo, a 15 años con 5 años de carencia, e intereses de mercado.

Pero, junto a los amplios desequilibrios económicos y comerciales que estas políticas generaron, se desencadenaron procesos de marginación y exclusión que profundizaron todavía más los niveles de pobreza del país, colocándolo en situación de fragilidad extrema ante cualquier contratiempo, del tipo que fuera. Era el resultado

de una lógica neoliberal deliberada ensayada en otros países con los mismos resultados y las mismas responsabilidades. Hoy en Haití, ayer en Marruecos, anteriormente en Indonesia, Tailandia, Mozambique, Guatemala, Nicaragua, India, Pakistán, Bangladesh, Honduras, Armenia, Bosnia, Turquía; da igual el país, porque en todos ellos vemos a la misma población deshecha entre sufrimientos, asumiendo con la dignidad de la que carecen sus gobiernos un destino repleto de desdichas, fruto de una lógica política implacable.

Nos hemos acostumbrado a que los Gobiernos descarguen en las ONG las atenciones esenciales, además de una deliberada dejación de responsabilidades que desemboca en un ritual cíclico, un elemento más de consumo de masas para el flamante mercado de la solidaridad

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, cada año se producen en el mundo unos 50 movimientos sísmicos de magnitud semejante al registrado en Haití. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se alcanza el grado de destrucción y devastación registrado en este país por el seísmo de enero de 2010. De hecho, Japón ha venido experimentando movimientos sísmicos de magnitudes similares o incluso superiores, sin apenas víctimas, como el que vivió en agosto de 2008 de 6,6 grados y que solo originó 60 heridos. Por tanto, analizar los efectos de las catástrofes exclusivamente en términos de las víctimas causadas, achacándolas a la fatalidad del destino o los caprichos de la naturaleza, es desconocer su génesis social y política, dificultando así una adecuada prevención de los mismos.

Del oportunismo mediático al capitalismo piadoso

Las catástrofes que se vienen sucediendo en las últimas décadas se han venido caracterizando por su magnitud y complejidad, exigiendo operaciones humanitarias de una gran envergadura en la medida en que los países donde éstas se suceden, de forma más o menos cíclica, se encuentran en una absoluta incapacidad, ya no para tratar de prevenirlas, sino siquiera para ofrecer unos mínimos dispositivos de ayuda y socorro básicos para su población. Todo ello ha llevado a que nos acostumbremos a contemplar cómo estos Gobiernos descargan en las organizaciones y el personal humanitario las atenciones esenciales sobre sus habitantes, haciendo una deliberada dejación de responsabilidades que se ve con satisfacción por muchas de estas agencias humanitarias y ONG para poder demostrar así su capacidad y competencias en la industria de la ayuda, construyendo un relato épico de su intervención.

Un ritual cíclico

Con cada catástrofe, nos hemos acostumbrado a un ritual cíclico dotado de su propio código de imágenes y símbolos que está acabando por desvirtuarse hasta extremos difíciles de comprender, y que es utilizado con altas dosis de oportunismo político y como un elemento más de consumo de masas para el flamante mercado de la solidaridad, mimetizado y repetitivo. Así, tras las primeras imágenes e informaciones sobre la catástrofe en los medios de comunicación vienen las primeras ofertas de ayuda, para lo cual se fletan aviones con material de emergencia acompañados por personal humanitario y enviados especiales que van a darnos cuenta de la catástrofe sobre el terreno. Al tiempo, se suceden las promesas de ayuda y las visitas fugaces de dirigentes políticos que realizan compromisos sin límite y quieren llevar en persona nuestras muestras de solidaridad y apoyo, comprometiéndose a no olvidar el país de cara a su reconstrucción. Posteriormente, y a medida que se reciben informaciones sobre la magnitud del drama y su coste en víctimas humanas, se realizan peticiones para recoger dinero por parte de las ONG, pasando a informar mediante anuncios y cuñas publicitarias de sus cuentas corrientes, poniéndose en marcha espectáculos solidarios de todo pelaje con la noble finalidad de recoger dinero para una futura reconstrucción, sin saber bien de qué ni en qué plazos. La comunidad internacional anuncia planes de reconstrucción y conferencias de donantes que difunden cantidades millonarias de ayuda para los próximos años, aunque con el paso del tiempo esas cantidades no llegan. Todo ello se acompaña de informaciones que van diluyéndose con el tiempo a medida que pierde interés la explotación mediática del drama humano y de sus imágenes icónicas, hasta que las informaciones sobre la catástrofe acaban por desaparecer por completo de los medios de comunicación. Posiblemente otra nueva tragedia sustituya a la anterior y alimente de nuevo el bucle, o simplemente todo se mantenga latente a la espera de desplegar el ritual, si cabe con mayor énfasis.

En Haití todo ha funcionado a la perfección desde el momento en que se empezaron a recibir las primeras informaciones del terremoto, desplegándose este ritual con precisión matemática.

La ayuda gubernamental de España a Haití

La catástrofe de Haití coincidió con la presidencia europea que ocupaba España en el primer semestre de 2010, así como con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las primeras semanas al frente de la cúpula comunitaria a cargo de Herman Van Rompuy como nuevo presidente de la UE, y la británica Catherine Ashton como alta representante de la Política Exterior y de Seguridad. España estaba, por ello, en el punto de mira, al tiempo que la falta de rodaje e incluso la inexperiencia de los nuevos

alto cargos comunitarios, especialmente de Asthon, obligó al Gobierno español a asumir un perfil mucho más activo en relación con la ayuda humanitaria a este país. No son casuales las visitas de miembros del Gobierno español a Haití, como las de la vicepresidenta los días 17 y 18 de enero, cuando la propia alta representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE nunca llegó a viajar al país sin hacer tampoco acto de presencia en las diferentes reuniones internacionales relacionadas con la ayuda al país.

La cooperación española puso en marcha desde que se tuvo conocimiento de la catástrofe un dispositivo de emergencia basado en la oficina de acción humanitaria de la AECID en coordinación con la OTC de Santo Domingo, utilizando el centro de acopio en Santo Domingo, así como el flamante Centro Logístico Humanitario de la Cooperación Española en Panamá. En los treinta días siguientes al terremoto se coordinaron un total de 26 vuelos, de los cuales, 16 fueron fletados por la AECID, cuatro por el Ministerio de Defensa y seis por la Cruz Roja, posibilitando el traslado de personal especializado en rescates, personal médico, material básico y de asistencia sanitaria. Al mismo tiempo, se permitió el viaje de un equipo de una treintena de periodistas de diferentes medios de comunicación, así como el envío de una unidad de búsqueda y rescate de la Unidad Militar de Emergencias. El papel del nuevo Centro Logístico Humanitario en Panamá fue menor del esperado, ya que desde esta base se movilizaron envíos que totalizaron las 91 toneladas, una parte de las cuales fueron donadas por el Gobierno salvadoreño, mientras que desde España se movilizaron envíos que sumaron 73 toneladas. Al mismo tiempo, el Gobierno español envió un contingente de 23 miembros de la Guardia Civil, así como una Agrupación Táctica Militar formada por el Buque de asalto anfibio *Galicia*, que llegó a Petit Grove el 4 de febrero, junto a una unidad sanitaria, otra unidad aérea y una última unidad de ingenieros y zapadores, con una duración de tres meses.

A los pocos días del terremoto, en reunión de Consejo de Ministros, el Gobierno español aprobó un crédito FAD no reembolsable de 5 millones de euros para la compra de bienes y servicios a Haití. Se utilizó para ello el instrumento más polémico y cuestionado de toda la historia de la cooperación española justamente cuando estaba siendo tramitada su reforma legal en el Parlamento, teniendo así un componente de desprecio por la vía utilizada para canalizar esta ayuda. Con posterioridad, el Consejo de Ministros de 9 de abril autorizó el gasto de 21,3 millones de euros para afrontar adquisiciones del Ministerio de Defensa en Haití, junto a otros 0,5 millones para hacer frente a diferentes gastos de la AECID en la operación de ayuda. Es decir, 43 veces más ayuda al ejército español que a la AECID en este acuerdo.

Al mismo tiempo, la AECID canalizó convenios con Acción Contra el Hambre y Cruz Roja por importe de 750.000 euros, comprometiéndose el 10% del presupuesto de emergencia de próximos años para Haití, una decisión sin precedentes en la cooperación española. Finalmente, se asignaron otros 26,9 millones de euros para aportaciones de emergencia a través de organizaciones multilaterales de distinta naturaleza, entre las que destaca el Programa Mundial de Alimentos con 13,3 millones, UNICEF con 9,2 millones, la Organización Panamericana de la Salud con 2,75 millones y el PNUD con 1,3 millones. También debe destacarse el convenio con la Universidad de Granada para realizar identificaciones genéticas, así como la labor de coordinación llevada a cabo entre diferentes administraciones públicas.

La propia AECID solicitó, por diferentes vías y canales, el ingreso de aportaciones de particulares en una cuenta corriente abierta a tal afecto, una decisión tan polémica como cuestionable, en mayor medida cuando en anteriores catástrofes humanitarias se procedió del mismo modo, generando escándalos e irregularidades muy graves relacionadas con el control y uso de los ingresos, como puso de manifiesto en su día el Tribunal de Cuentas. A 17 de marzo de 2010, la recaudación en la cuenta bancaria habilitada por la AECID para la recaudación de fondos destinados a paliar las consecuencias del terremoto de Haití mediante la inserción de anuncios en los medios de comunicación ascendía a 2,41 millones de euros, si bien, no se informó del destino final de estos ingresos. También comunidades autónomas como la valenciana actuaron de la misma forma, si bien, ni siquiera han llegado a informar de las cantidades obtenidas.

Dinero recaudado por ONG y comisiones bancarias

Por su parte, las ONG españolas hicieron un despliegue sin parangón para recaudar dinero desde el día siguiente al terremoto, llegando a obtener a los 30 días posteriores al desastre una cifra histórica que superaba los 72 millones de euros, colocando así a España al mismo nivel que los países que más ayuda han canalizado a través de ONG, como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. De ese dinero, el 78% se ingresó a través de transferencias bancarias según datos ofrecidos por la Asociación Española de Fundraising. Lo sorprendente es que, si bien muy pocas ONG españolas estaban trabajando en el terreno en Haití antes del terremoto con trayectoria, incidencia, compromiso y conocimiento, fueron la gran mayoría de ellas las que se lanzaron a pedir dinero: grandes y pequeñas, internacionales y locales, muchas de ellas sin experiencia en la región o en la ayuda humanitaria, informando de sus cuentas corrientes e incluso llegando a pedir medicamentos, ropa y alimentos, justamente lo que no se debe recoger ante una catástrofe como esta. Parecía que Haití brindaba

una magnífica oportunidad para afianzarse en el mundo de la solidaridad a muchas organizaciones que venían sufriendo la crisis económica, haciendo de la ayuda humanitaria su elemento de legitimidad social como ya ocurrió en el año 1994 con la tragedia de los Grandes Lagos. Pero el sector crece, y si los informes internacionales destacaron negativamente que a esta catástrofe acudieran solícitas unas 225 ONG diferentes, dieciséis años después a Haití han acudido más de 600, algunas de ellas ofreciendo un espectáculo deplorable, frente a otras que por el contrario, han tratado de llevar a cabo un trabajo valioso en línea con la trayectoria y el conocimiento que han acumulado durante años en el país. Sin embargo, son escasísimas las ONG que optaron por hacer una labor de denuncia, información y presión social sobre las condiciones económicas, políticas y sociales de Haití, entre las que destacan ACSUR-Las Segovias, Ingenieros Sin Fronteras y el Observatorio para la Deuda y la Globalización.

Pero, en la medida en que las ONG apostaron por la recaudación de dinero entre los ciudadanos, una vez más surgió una importante polémica por el papel de bancos y cajas en la recaudación de estos fondos y en el cobro de comisiones muy elevadas por realizar estas aportaciones humanitarias. El mínimo que cobraban las entidades bancarias era de 7 euros incluso por una transferencia de 10 a las organizaciones humanitarias, con comisiones que han oscilado entre el 11 y el 25%, llegando en algún caso incluso al 70%, por lo que todo hace suponer que los beneficios obtenidos directamente con la cuantiosa suma que los ciudadanos ingresaron a las ONG fueron muy elevados, pudiéndose estimar a la luz de los datos señalados entre 6,1 a 25 millones de euros. Este es un tema tan polémico como recurrente cada vez que sucede una gran catástrofe, habiendo surgido ya con anterioridad con motivo del huracán Mitch en 1998 y el tsunami del sureste asiático en 2004. Hasta tal punto que el Gobierno español se comprometió en el Congreso de los Diputados en el año 2005, a evitar que bancos y cajas pudieran seguir cobrando estas comisiones en el futuro, al igual que había hecho el Parlamento Europeo en 2004. A pesar del tiempo transcurrido, el vacío normativo permite que se sigan aplicando estas elevadas comisiones bancarias, y lo que es más grave, no han sido pocos los bancos y cajas de ahorro que han llegado a publicar anuncios en prensa reclamando el ingreso de dinero en cuentas de sus propias entidades para ser ellos quienes, con posterioridad, entreguen el dinero recogido a las instituciones por ellas elegidas, lo que supone una grave disfuncionalidad del sistema internacional de ayuda.

La imagen y los mensajes latentes

Mención aparte merece el despliegue informativo que desde el primer momento acompañó al terremoto. Fueron numerosos los medios que desplegaron periodistas sobre el terreno, algunos de los cuales fueron trasladados por la propia AECID, quien puso sus infraestructuras, medios e incluso al personal diplomático y técnico al servicio de estos informadores, impidiendo con ello que pudieran atender otras obligaciones más acuciantes. Buena parte de estas informaciones abusaron de una banalización en las imágenes y mensajes que, en no pocas ocasiones, llegaron a utilizar de forma deliberada el horror de la situación, llegando a vulnerar la dignidad de las víctimas, que se filmaron con una crudeza como no habíamos visto con anterioridad: cadáveres completamente desnudos de hombres, mujeres y niños, formando montañas o enterrados como basura en fosas comunes. La pobreza extrema de la población junto al hecho de que fueran negros, activó una mezcla explosiva que dio como resultado latente el mensaje del salvaje desesperado, con informaciones de pillajes, robos, violencia, ante los que solo el ejército era capaz de lanzar su salvadora ayuda desde helicópteros. El sufrimiento se había transformado en horror y las víctimas pasaban a ser peligrosas hordas hambrientas y sedientas ante las que solo unos arriesgados cooperantes escoltados por el ejército podían socorrer. Y mientras tanto, se apelaba una y otra vez a la generosidad de los ciudadanos para que hicieran aportaciones económicas, sin explicarse bien la finalidad y el destino de las mismas.

La construcción de un capitalismo piadoso

Posiblemente todo ello fuera necesario para abundar en una construcción intelectual basada en la idea de un capitalismo piadoso en sus respuestas así como en la manera de intervenir y aprovechar la ayuda humanitaria ante una catástrofe como el terremoto de Haití. La misma comunidad internacional que ha sido de forma efectiva quien ha gobernado Haití desde el golpe de 2004, es quien ahora se ha lanzado a enviar ayuda humanitaria, aunque se negara a ampliar el mandato de la misión de la ONU en el país, más allá de su objetivo militar inmediato, tratando de mejorar la salubridad, la habitabilidad, la gobernanza o la satisfacción de servicios básicos para la población.

Las imágenes que vemos habitualmente en los medios de comunicación cada vez que se produce una calamidad como la que se ha dado en Haití, debe llevarnos a pensar que, por encima de la necesaria solidaridad que estas catástrofes desatan, hay que poner en marcha mecanismos políticos supranacionales que obliguen a estos países a salvaguardar y proteger a su población para evitar que la generosa ayuda

humanitaria se convierta en una simple caricatura de tanta desidia política durante décadas.

Tan preocupados como estamos por establecer un nuevo orden mundial y en dotar de contenido a las instituciones internacionales, nos ha llevado a olvidar establecer mecanismos que obliguen a tantos Gobiernos a emplear parte de sus recursos en evitar que sus poblaciones se conviertan cíclicamente en silenciosas víctimas a las que solo les queda la generosidad de las ONG. Ni las ONG pueden reemplazar a los Gobiernos, ni tampoco deben jugar a hacerse cargo de las políticas estrictamente públicas, sin que ello suponga en absoluto renunciar a su valiosa aportación y mucho menos, dejar de valorar la impresionante muestra de generosidad a través de las contribuciones que estas organizaciones vienen haciendo en situaciones tan dramáticas, proporcionando ayuda vital a poblaciones que de otra forma estarían abandonadas a su suerte. No podemos renunciar a nuestro legítimo derecho a indignarnos ante las catástrofes que se suceden y mucho menos, dejar de mostrar lo mejor de cada uno de nosotros, haciendo llegar nuestros sentimientos y nuestro apoyo a tantas personas que sufren y lo necesitan; pero es ilusorio pensar que tanto desastre y tanta calamidad pueden solucionarse solo con la compasión de las ONG y la solidaridad de cada uno de nosotros, ante la ineficiencia de los Gobiernos y la voracidad de un sistema económico y político mundial en el que los pobres siempre son los perdedores.

Pocas veces se ha analizado en profundidad la estrategia de ayuda humanitaria desplegada por la comunidad internacional ante catástrofes. La experiencia contraproducente que se vivió ante la tragedia de los Grandes Lagos, en el año 1994, y los graves errores que allí se cometieron, apenas fueron evaluados por algunos donantes, como Dinamarca y Noruega, lo que llevó a que se volvieran a repetir en sucesivos dramas posteriores. Años después, la magnitud del desastre causado por el tsunami que asoló el sudeste asiático en diciembre de 2004, junto a la intensidad de la ayuda que la comunidad internacional desplegó, así como las numerosas contradicciones y errores que se cometieron, llevaron a una evaluación de la ayuda posterior al tsunami que arrojó muchas más luces que sombras, evidenciando que buena parte de las promesas de reconstrucción de los donantes se incumplieron. En el caso de España, las conclusiones en el marco de la *Tsunami Evaluation Coalition* no pudieron ser más concluyentes: «España es un donante inoperativo por sus mecanismos de financiación rígidos, lo que igualmente limita su capacidad de ayudar en consonancia con las necesidades y contribuir positivamente a los esfuerzos de ayuda a nivel internacional». Esperemos que se hayan aprendido las lecciones necesarias para evitar la repetición de errores y descuidos. Por ello, el

deseo de esperanza que todos compartimos nos exige conocer e interpretar mejor una realidad tan amarga como la que se nos presenta tras cada catástrofe.

Algunas reflexiones finales y lecciones estructurales para una mejora de la ayuda humanitaria

Para una adecuada prevención, actuación e intervención sobre catástrofes es imprescindible conocer convenientemente las condiciones estructurales del país desde una perspectiva muy amplia, incluyendo su evolución económica, social y política, las condiciones sociales de su población, su habitabilidad y condiciones de pobreza en el sentido más amplio del término. Son estos factores los que van a determinar el posible número de víctimas y damnificados, en mayor medida que la magnitud e intensidad de la calamidad. Por tanto, la génesis política y social de las catástrofes debería ser un elemento a incluir a la hora de conocer y evaluar su impacto.

Al mismo tiempo, las decisiones y acuerdos de las instituciones multilaterales sobre los países tienen consecuencias estudiadas desde hace tiempo, que también inciden sobre el efecto de las catástrofes, algo que hasta la fecha se ha venido ignorando. Este es un factor que debería incorporarse a la hora de evaluar con carácter previo los acuerdos institucionales a aplicar sobre los países en desarrollo.

Los países sobre los que Naciones Unidas ejerzan un tutelaje en forma de misión internacional en el país deben proceder a reconstruir y fortalecer las estructuras institucionales del propio país, en mayor medida si el país es proclive a registrar desastres naturales, algo a lo que deben comprometerse especialmente los países que forman parte de esas misiones internacionales.

Europa debería avanzar hacia la construcción de mecanismos institucionales y técnicos capaces de articular la ayuda humanitaria de sus países miembros, en el marco de su política de ayuda al desarrollo, evitando así contradicciones e intereses políticos, militares o estratégicos, y en coordinación estrecha con otros grandes donantes, especialmente de carácter regional e institucional. Para ello, debería reforzarse el papel de la ONU en este campo, mediante la creación de una agencia mundial de ayuda humanitaria, de carácter civil, y desvinculada del Ejército.

España debería delimitar con mayor precisión el protocolo de intervención ante desastres de forma que se pueda conocer con precisión cómo intervenir ante cada catástrofe, quien lo hará, plazos, formas, medios e instrumentos, para evitar la sensación de que con cada uno de estos acontecimientos surjan todo tipo de entidades para pedir dinero, sin que vuelva a saberse más acerca de su destino ni su labor en la ayuda a las víctimas. La AECID y las instituciones públicas deben renunciar a pedir donativos a la población, algo que debe establecerse por Ley.

Únicamente deberían de intervenir en los países afectados por catástrofes aquellas organizaciones que estén trabajando en el país o tengan experiencia contrastada en ofrecer dispositivos de ayuda de emergencia. Esto no significa que otras entidades sociales no puedan intervenir o recabar ayuda y esfuerzos, sino que deberían hacerlo a través de estas organizaciones. Al mismo tiempo, toda institución privada que reclame dinero de los ciudadanos a costa de una calamidad o con la finalidad aparente de ayudar a las víctimas deberá estar obligada a rendir cuentas públicas de este dinero, volumen, destino y empleo de las cantidades, bajo sanción en caso de no hacerlo. Las entidades bancarias y cajas de ahorro no podrán pedir donativos, al tiempo que se debería impedir por Ley que apliquen comisiones de ningún tipo a las transferencias e ingresos que realicen a las entidades solidarias para ofrecer ayuda humanitaria y/o cooperación al desarrollo.

Debería revisarse en profundidad el papel y la actuación de los medios de comunicación ante catástrofes, especialmente bajo la intervención de la cooperación española. El sector debería reflexionar en profundidad sobre su responsabilidad en la generación de mensajes e imágenes que se alejan de la información para tratar de alimentar sencillamente el espectáculo a costa de vulnerar la dignidad de sociedades enteras.

España debe evitar la progresiva militarización de la ayuda humanitaria así como la utilización de instrumentos comerciales, generadores de deuda o crediticios. Los trabajos de reconstrucción tienen que concebirse desde la participación y la autonomía plena de la sociedad y sus víctimas. Todas las intervenciones humanitarias deberían ser sometidas a evaluaciones independientes, durante y después de haberse puesto en marcha, que a su vez deberían ser analizadas por todos los agentes e instituciones implicadas, siendo sus resultados trasladados a la sociedad.

Carlos Gómez Gil es Doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Alicante y Director del Observatorio Permanente de la Inmigración de esta universidad, miembro de RIOS (Red de Investigadores y Observatorio de la Solidaridad). Este trabajo forma parte de un estudio amplio realizado por la red RIOS, y ha sido publicado en el número 110 de la revista *Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global*. cgomezgil@ua.es